

EL TAMAÑO DEL ESTADO: ¿UN PROBLEMA IDEOLÓGICO?



Por Rubén Torres

El tamaño del Estado constituye motivo habitual de discusión: algunos lo ven excesivo; otros coinciden en que el gasto es elevado aunque señalan que se debe ser realista con el ritmo al que es viable reducirlo, y hay quienes sostienen que el nivel es adecuado y que, en todo caso, se debe mejorar su calidad. Cada una de estas opiniones se vincula con una postura “ideológica”.

El “Panorama de Administraciones Públicas” de la OCDE es una radiografía del sector público de sus países miembros: en ellos el gasto público más alto fue el de Francia: 56,5% seguida por Finlandia y Dinamarca, y promedió 40,9% en 2015, prácticamente el mismo que Argentina, donde el ingreso promedio por habitante es al menos 3 veces más bajo que en aquellos.

Los gobiernos reaccionaron a la crisis de 2009 aumentando el gasto en servicios sociales, en la OCDE el aumento fue 2,1% ¿Qué pasó en Argentina en ese tiempo? El gasto creció 13,5 puntos (en 2007 el tamaño del Estado era 28,7% del PBI y el récord fue 42,2% en 2015).

El número de empleados públicos como porcentaje del empleo total en los países más ricos aumentó a 18,1%. En Argentina es alrededor de 16%, y entre 2003 y 2015 el empleo público creció 52% en Nación y 53% en provincias. Casi uno de cada cuatro asalariados formales son estatales, el doble al promedio de Latinoamérica.

Estados Unidos tiene 3143 condados y una población de 326 millones de habitantes: uno por cada 103.700 habitantes; en Argentina hay 44 millones de personas y 2300 municipios: uno cada 19.130 personas (ambos en promedio): el costo de cada unidad administrativa es varias veces más alto en Argentina y recae sobre menos personas.

La Cámara de Diputados argentina tiene 257 miembros y un presupuesto anual equivalente a 208 millones de euros: costo promedio por legislador 67.400 euros/mes (sueldo propio y de colaboradores, teléfonos, secretarías, movilidad, entre otros). España tiene 350 diputados y un presupuesto de 91 millones de euros, relación por legislador: 21.700 euros/mes; un costo por diputado 3 veces menor.

La Cámara de Senadores argentina tiene un presupuesto anual equivalente a 204 millones de euros y 72 legisladores: costo promedio 236.000 euros al mes. En España ese cuerpo tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros y 266 miembros: costo promedio mensual 17.540 euros; 13,5 veces menor. Nosotros somos más pobres: nuestro ingreso per cápita es de USD 14.400 y el de España USD 28.156 en dólares corrientes, pero nos damos el “lujo” de tener estructuras legislativas muchísimo más caras.

A partir de 1975/76, Argentina comenzó a desviarse de lo que sucede en países vecinos. Hasta ese momento, si bien había problemas, la pobreza era baja y las posibilidades de ascenso social elevadas. La dic-

tadura generó enormes daños, en el plano económico, crecieron pobreza, desigualdad y deuda externa, y el salario perdió 25% de poder adquisitivo.

Hace poco más de 35 años, el 10 de diciembre de 1983, dejábamos atrás una pesadilla para iniciar una democracia que prometía bienestar general. Después de mucho tiempo el pueblo argentino se encolumnó detrás de un ideal y objetivo común: construir una sociedad justa, moderna y desarrollada.

La realidad es que si bien se avanzó en la consolidación de un régimen democrático y participativo, las expectativas de crecimiento sostenido y de mejora en lo social, con creación de empleo, descenso de los niveles de pobreza y desigualdad se han visto frustradas una y otra vez.

La pobreza en aumento

En estos 35 años, los problemas sociales han empeorado: la pobreza en 1983 era del 16% (en América Latina del 40%), y fue creciendo hasta llegar a 32%, mientras en la región se redujo 10 puntos; la informalidad laboral del 22% en 1983, se encuentra estancada en 33% y la desocupación se redujo en los 2000, pero por expansión del empleo público.

Entre 1983 y 2003 el gasto público fue de alrededor del 28% del PBI, luego creció vertiginosamente y la presión tributaria pasó del 22 al 32% del PBI. Hoy son los más altos de la historia, la calidad de los servicios e infraestructura han empeorado y dirigencia y sociedad no han podido alcanzar consenso sobre los problemas más relevantes, ni acuerdos mínimos sobre temas económicos centrales como la necesidad de mantener equilibrios macroeconómicos, precios relativos sustentables o una estrategia de desarrollo que enfatice en la productividad, competitividad y distribución del ingreso, el rol del Estado y la

“EL NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS COMO PORCENTAJE DEL EMPLEO TOTAL EN LOS PAÍSES MÁS RICOS AUMENTÓ A 18,1%. EN ARGENTINA ES DE ALREDEDOR DEL 16% Y ENTRE 2003 Y 2015 EL EMPLEO PÚBLICO CRECIÓ 52% EN NACIÓN Y 53% EN PROVINCIAS. CASI UNO DE CADA CUATRO ASALARIADOS FORMALES SON ESTATALES, EL DOBLE AL PROMEDIO DE LATINOAMÉRICA”

mejora de educación, salud, justicia y federalismo.

Crecimos menos que el mundo: 2,2 contra 3,1%, y que América Latina: 3%. La inflación fue la más alta del mundo (70% promedio anual). La pobreza puede tener diversas miradas, la más habitual: la capacidad de generar ingresos por niveles superiores al valor de la canasta básica total y la vulnerabilidad económica, según la posibilidad de sostenerlos en el tiempo. O la estructural en que existe persistencia de la incapacidad de generar esos ingresos.

En ambas resulta multidimensional, con condiciones de vivienda precarias, sin acceso a servicios sanitarios, hacinamiento, bajos niveles de educación, violencia, escasa formación y experiencia para el empleo, entre otras cosas.

Para la primera mirada, cabe esperar que una mejora económica baje los niveles de pobreza en hogares vulnerables y la batalla por crecimiento económico y estabilidad de precios sean indispensables pero no suficientes; pero no lo hará en el alrededor del 20%, que requiere mucho más que mejoras de la economía para resolver la segunda mirada.

Allí son necesarias políticas estructurales (calidad educativa, equidad en salud, mejora de infraestructura, etc.), y resulta imprescindible y urgente la presencia de un Estado nacional, provincial y municipal que mejore sustancialmente la calidad de la gestión del gasto público y los sistemas de salud y educación, más profesional y preocupado por la infraestructura urbana y la seguridad pública.

Las dimensiones de ese Estado, en términos del número de trabajadores o volumen de gasto que insume, poco dicen respecto de sus funciones y resultados y su sobredimensionamiento dejó de ser un problema ideológico. La dirigencia en general deberá revisar sus responsabilidades. 